Managua, 25 de agosto del 2014

Diputado Wálmaro Gutiérrez
Presidente de la Comisión de Economía, producción y presupuesto
Su oficina

Señor Presidente de la Comisión:

Por el presente medio expreso mi desacuerdo con el dictamen de mayoría sobre la "Ley de Modificación a la Ley No. 851 Ley Anual de Presupuesto General de la República 2014", en consecuencia emito mi voto razonado, con base en la siguiente argumentación:

1. La disminución de ingresos y de gastos contenidos en la propuesta de reforma presupuestaria tienen su principal causa en los contenidos de la Ley de Concertación Tributaria, impuesta a fines del año 2012. En efecto, esa ley, resultado de las negociaciones secretas entre el gobierno y la cúpula de potentados económicos otorga privilegios a minorías opulentas que en buena medida explican la reducción de ingresos, particularmente en el impuesto sobre la renta y el impuesto selectivo de consumo.

Si bien hasta ahora de manera inexplicable el gobierno no ha presentado una evaluación sobre el impacto de la Ley de Concertación Tributaria, el análisis simple de los datos evidencia la desproporción entre la desaceleración de la actividad económica y la disminución de las recaudaciones. El gobierno ha anunciado que el Producto Interno Bruto se situará entre el 4% y el 4.5%, esto es, una disminución de entre 0.5% y 1% en relación a las previsiones iniciales, en cambio la caída en las recaudaciones supera el 7%. ¿Cómo puede explicarse esta desproporción si no es por el impacto negativo de la Ley de Concertación Tributaria? La alegación de funcionarios gubernamentales de que la reducción de ingresos obedece a la desaceleración económica es una coartada para esconder el negativo impacto del contubernio entre el gobierno y el denominado gran capital.

Por otra parte, sencillos ejercicios de correlación estadística, que deberían estar al alcance de los técnicos del gobierno, muestran que a partir de la entrada en vigencia de la mencionada Ley, el ritmo de las recaudaciones dejó de corresponderse con el ritmo de la actividad económica.

Si antes estuvimos en desacuerdo con la Ley de Concertación Tributaria, anticipando sus negativos impactos, es natural que ahora estemos en desacuerdo con su consecuencia, que es la disminución en la recaudación en relación a las previsiones.

2. Los recortes presupuestarios tienen un impacto negativo en el empleo y en campos tan sensibles como la educación, lo cual repercute en el empobrecimiento de familias nicaragüenses.

La reducción, por ejemplo, de más de cien millones de córdobas en el presupuesto del Ministerio de Educación profundiza los rezagos en un campo esencial para el progreso económico y social del país pues afecta nada más y nada menos que la rehabilitación de escuelas. Todos hemos visto las precarias condiciones en que muchos estudiantes reciben sus clases: hacinados en aulas con techos en mal estado, sin agua potable o sin servicios higiénicos, o en estados deplorables, sin pupitres, sin pizarras y aún bajo árboles o carpas. Y sin embargo el régimen no ha tenido escrúpulos en castigar a infantes y adolescentes prolongando la precariedad de sus condiciones escolares.

Voceros oficiales alegan el dudoso motivo que estos recortes obedecen a que el Ministerio de Educación no ha concluido los trámites de licitación. Un argumento que se repite año con año cada que vez que se aprueba una reforma presupuestaria. En esas circunstancias, admitiendo que sea cierto el dudoso argumento alegado, cabe preguntarse qué prioridad asigna el Ministerio de Educación a la rehabilitación de escuelas, o bien, qué capacidades –o incapacidades- tiene ese ministerio para no estar en posibilidad de diseñar y ejecutar proyectos tan simples como es la rehabilitación de escuelas.

Similares argumentos pueden presentarse respecto de los recortes al fondo para la vivienda social, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Construcción y Transporte, a la educación técnica.